



**APRUEBA CONTRATO DIRECTO PARA
PRESTACION DEL SERVICIO DE DEFENSA PENAL
PUBLICA CON MAURICIO IGNACIO MARTINEZ
PERALTA, RUT N° 16.014.496-3, ZONA 1,
REGIÓN DE AYSÉN**

COYHAIQUE, 01 JUN. 2016

Resolución Exenta N° 000023,

VISTOS:

1. El D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado;
2. Lo dispuesto en los artículos 7 y 49 de la Ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública;
3. La Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
4. La resolución N° 1600, de fecha 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;
5. Resolución Exenta N°03 de 09 de Enero de 2013 que nombra en calidad de Defensor Regional de la Región de Aysén a don Fernando Abelino Acuña Gutierrez.
6. Resolución Exenta N° 467, de 30 de Octubre de 2015 conforme a la cual se delegó por el Sr. Defensor Nacional las facultades que en ella se indican a los Defensores y Defensoras Regionales de la Defensoría Penal Pública.
7. El Oficio DN N° 368 de 19 de Mayo de 2016 que aprueba convenio directo con don Mauricio Ignacio Martinez Peralta desde el 01 de Junio de 2016 al 30 de Noviembre de 2016, considerando las necesidades de cobertura y de acuerdo a lo solicitado por Oficio DR N° 44 de 06 de Mayo de 2016;

CONSIDERANDO:

1. Que existe la necesidad de mantener cobertura de defensa en la denominada Zona 1 de la Región de Aysén,
2. Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 inciso final de la Ley 19.718, se ha autorizado por la Defensoría Nacional la celebración de un convenio directo para la asunción de la defensa penal de los imputados, sujetándose en todo dicha contratación a las reglas aplicables en los procesos de licitación, todas las cuales están contenidas en el Reglamento de Licitaciones y las Bases Administrativas Generales.
3. Que en mérito de lo señalado por el citado Oficio DN N° 368 de 19 de Mayo de 2016, corresponde aprobar por el respectivo acto administrativo el contrato directo suscrito entre la Defensoría Penal Pública y don Mauricio Ignacio Martinez Peralta, RUT N° 16.014.496-3, con fecha 31 de Mayo de 2016, para la prestación del servicio de defensa en la zona antes señalada.

RESUELVO:

- 1° **AUTORIZÁSE** la aprobación del contrato directo para prestación del servicio de Defensa Penal Pública, celebrado con don Mauricio Ignacio Martinez Peralta, RUT N° 16.014.496-3, aprobado por Oficio DN N°368 de 19 de Mayo de 2016, pues se considera indispensable para la Institución.

2° APRÚEBASE, el contrato directo para prestación del servicio de Defensa Penal Pública, de fecha 31 de Mayo de 2016, celebrado con don Mauricio Ignacio Martínez Peralta, RUT 16.014.496-3 , aprobado mediante Oficio DN N°368 de 19 de Mayo de 2016, que es del siguiente tenor:

**CONTRATO PARA PRESTACION DEL SERVICIO DE DEFENSA PENAL PUBLICA CON
MAURICIO IGNACIO MARTINEZ PERALTA.
RUT N° 16.683.601-8, ZONA 1, REGIÓN DE AYSÉN**

En Coyhaique a 31 de mayo de 2016, entre la **DEFENSORÍA PENAL PUBLICA**, RUT: 61.941.900-6, representada por don Fernando Abelino Acuña Gutiérrez, abogado, Defensor Regional de Aysén, RUT N°8.977.199-4, conforme a lo dispuesto por Resolución Exenta N° 614 de 3 de Octubre de 2014, ambos domiciliados para estos efectos en calle Freire N° 274, Coyhaique, en adelante también denominada “la Defensoría” y Mauricio Ignacio Martínez Peralta, RUT 16.014.496-3 en adelante también “el prestador” o “el contratante” domiciliado en calle Freire N° 130, Comuna de Coyhaique , se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

Que el artículo 49, de la Ley N° 19.718, confiere al Defensor Nacional la facultad para celebrar convenios directos, por un plazo fijo, con abogados o personas jurídicas públicas o privadas que se encuentren en condiciones de asumir la defensa penal de los imputados hasta que se resuelva la nueva licitación. Que en virtud de Resolución Exenta N° 467 de 30 de Octubre de 2015 se delegó por el Sr. Defensor Nacional las facultades que en ella se indican en los Defensores y Defensoras Regionales de la Defensoría Penal Pública.

Que la Defensoría Regional de Aysén ha solicitado la aprobación de un convenio directo, autorización que se ha efectuado mediante Oficio N° 368 del Defensor Nacional, de fecha 19 de Mayo de 2016. En tal sentido, entendiendo que el prestador cumple entonces con las exigencias para realizar y desarrollar servicios de defensa penal y consecuentemente con ello es procedente la celebración del presente convenio directo con la Administración para cumplir el servicio de prestación de defensa penal en las condiciones que se pactan y bajo las normas legales y reglamentarias pertinentes.

SEGUNDO: DISPOSICIONES APLICABLES Y DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Formarán parte del contrato, las Bases Administrativas Generales, en adelante BAG o las bases aprobadas mediante Resolución Afecta N° 158, de 2013, incluyendo sus modificaciones, documentos que se dan por expresamente reproducidos e integrados al texto de este convenio y asimismo, aceptado por las partes.

Además, serán aplicables a este convenio y a la ejecución de sus prestaciones y obligaciones, todas las normas de la Ley N° 19.718; del Reglamento de Licitaciones y Prestación de Defensa Penal, aprobado por Decreto Supremo N° 495, de 2002, del Ministerio de Justicia, en adelante el reglamento; de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886, y sus posteriores modificaciones; del Código Procesal Penal; las disposiciones relativas a derechos y garantías del imputado contenidas en la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales ratificados y vigentes en Chile.

Especialmente la prestación de la Defensa deberá sujetarse a los estándares básicos para el ejercicio de la defensa penal pública, aprobados por el Defensor Nacional, conocidos y aceptados por el prestador.

TERCERO: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto será la prestación de defensa penal pública, de acuerdo con las disposiciones y documentos antes señalados, y conforme a las prácticas y normas que regulan la actividad profesional de los abogados.

Constituye defensa penal pública aquella que se proporciona conforme a la Ley N° 19.718, a los imputados o acusados según el Código Procesal Penal por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado.

Para estos efectos, se entenderá por prestación de servicio de defensa penal pública el conjunto de acciones, judiciales y extrajudiciales, que el defensor penal público debe realizar durante todas las etapas de persecución penal dirigida en contra del imputado y, en su caso, hasta la completa ejecución de la sentencia, destinadas a resguardar los intereses, garantías y derechos del mismo.

Se comprenden también en las funciones del defensor, la disponibilidad del defensor para realizar las tareas que el Defensor Regional le encomiende en relación a actividades relacionadas con la labor de la Defensoría Penal Pública, como asistencia a plazas de Justicia, paneles de información, turnos, coberturas u otras similares.

CUARTO: NÓMINA DE ABOGADOS

La defensa será ejercida por el siguiente abogado, que se denominará defensor penal público:

- **Mauricio Ignacio Martínez Peralta, RUT N° 16. 014.496-3, domiciliado en Freire N° 130, Comuna de Coyhaique.**

Con el profesional antes señalado y los de otros contratos adjudicados en la misma zona, si los hubiere, la Defensoría Regional elaborará una nómina de abogados que deban asumir la defensa de los imputados o acusados en la localidad respectiva. Esta nómina será actualizada periódicamente por la Defensoría Regional correspondiente y será remitida a las Defensorías Locales, Juzgados de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Cortes de Apelaciones de la región y localidad respectiva, y otras entidades que se estimen necesarias para la adecuada prestación de defensa.

La elaboración y actualización de la nómina, así como la designación de los abogados en las causas se realizará conforme con lo dispuesto en el punto 7.10 de las bases, y las disposiciones pertinentes de la ley 19.718.

Designado, el defensor penal público no podrá excusarse de asumir la representación del imputado o acusado.

QUINTO: ZONA DE LA PRESTACIÓN DE DEFENSA

Los servicios serán prestados en la región de Aysén, zona 1, Coyhaique y Puerto Aysén, donde será ejercida la defensa y que comprende el Tribunal de Letras y Garantía de Puerto Aysén, el Tribunal de Garantía de Coyhaique, Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique.

Asimismo, se comprenden las gestiones ante la I. Corte de Apelaciones de Coyhaique y la Excelentísima Corte Suprema, en su caso.

Todo ello sin perjuicio de que se le puedan solicitar trabajos en el ámbito de defensa y campo de acción de la defensoría, fuera de esa jurisdicción, pero dentro de la región.

SEXTO: CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE DEFENSA

Las tareas serán desarrolladas de acuerdo a lo señalado en la cláusula Segunda del presente convenio, en lo que corresponde. Así mismo, deberá disponer para el desarrollo de sus labores de defensa de una oficina y de instalaciones idóneas, con las condiciones de privacidad necesarias para atender a imputados, testigos, familiares y peritos y sala de espera, debidamente calefaccionados con su adecuado y correspondiente mobiliario y servicios higiénicos. Igualmente, deberá contar con equipos computacionales y conexiones de banda ancha, antivirus, licencias y un navegador adoptado como estándar para la Institución, impresora con escáner, pistola lectora, todos técnicamente aptos para el desarrollo de las labores de defensa, así como línea telefónica fija y aparatos celulares disponibles las 24 horas del día en caso de turno. La oficina antes indicada será atendida por un asistente administrativo de su cargo, en un horario preestablecido y comunicado a la Defensoría, de Lunes a Viernes, de acuerdo a todo lo señalado en el Anexo N° 1 de este convenio, denominado Propuesta Técnica para Convenio Directo, que el prestador presentó a esta Defensoría, documento que forma parte integrante de este contrato, sin necesidad de ser reproducido íntegramente, por ser conocido por ambas partes. Para ello, se efectúa expresa remisión a la propuesta del Prestador, y, como se ha pactado precedentemente, se entienden todas ellas integradas al texto de este contrato.

SEPTIMO: NÚMERO DE CAUSAS

La defensa se efectuará por las causas que corresponda asumir al prestador durante el período de su convenio, y que correspondan a la zona 1, todo ello en la forma establecida en la Propuesta Técnica para Convenio Directo, suscrita y aceptada por las partes, la que entienden forman parte del presente instrumento.

Asimismo, el prestador deberá estar disponible para efectuar labores que el Defensor Local Jefe o el Defensor Regional de Aysén le encomiende en relación a turnos, cobertura u otras similares.

OCTAVO: DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio tendrá vigencia desde el 01 de Junio de 2016 y hasta el 30 de Noviembre de 2016, ambas fechas inclusive, según desempeño del profesional o mientras sean necesarios sus servicios o mientras se licita la zona antes señalada.

Por razones de buen servicio, específicamente para mantener la necesaria y adecuada cobertura de defensa penal pública en la Región, la ejecución de la prestación de defensa penal pública, objeto del presente convenio se iniciará el 1 de Junio de 2016, sin perjuicio de la posterior resolución aprobatoria.

Todos los gastos que irrogue la suscripción del presente convenio, e impuestos que sean pertinentes en su caso, serán de cargo del prestador.

NOVENO: OBLIGACIONES ESENCIALES

Serán obligaciones esenciales del contrato, aquellas sin cuya concurrencia no puede entenderse cumplida una prestación del servicio de defensa penal pública, siendo éstas las siguientes:

a) Obligación de prestar defensa penal

La prestación de defensa penal, definida como la obligación de cumplir con todas las funciones inherentes al rol de un defensor penal público, entendiéndose por esta el conjunto de acciones judiciales y extrajudiciales que personalmente el abogado debe realizar, cumplir y ejecutar de manera diligente y oportuna en todas las causas que le fueren asignadas como defensor titular o delegado, durante todas las etapas de persecución penal y hasta la completa ejecución de la sentencia, deberá ejercerse de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.1 inciso segundo y 8.4.A de las Bases de Licitación, y conforme lo establece la Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal, la Ley N°19.718, el Decreto Supremo N° 495 de 2002, del Ministerio de Justicia, los estándares básicos de defensa penal fijados por el Defensor Nacional y los instructivos generales de prestación de defensa penal.

b) Obligación de mantener las condiciones establecidas en la propuesta

El contratante deberá mantener durante toda la vigencia del contrato cada una de las condiciones establecidas en su propuesta, de acuerdo a lo establecido en el punto 8.4.B de las Bases Administrativas de Licitación.

Si durante la ejecución del contrato, el prestador necesita introducir cambios en la infraestructura de atención de usuarios, deberá solicitar autorización previa a la Defensoría Regional respectiva.

La Defensoría Regional respectiva tendrá amplias facultades para fiscalizar el cumplimiento de estas condiciones, y para efectuar la verificación en terreno del cumplimiento de los compromisos adoptados en esta materia por el prestador.

c) Obligación de cumplimiento de normativas laborales y previsionales

El prestador deberá dar cumplimiento a la normativa laboral y previsional, respecto del personal bajo su dependencia, conforme lo establece el punto 8.4.C de las Bases de Licitación.

DÉCIMO: DE LAS OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

a) Obligación de informar y de llevar registro completo y oportuno de causas

Sin perjuicio de la emisión de los informes regulados en el número 9.2 de las bases y del cumplimiento de los instructivos vigentes que regulan procesos que influyen en la prestación de defensa (Modelo de Operación Eficiente, MOE), el prestador tendrá la obligación de entregar información para mantener actualizado permanentemente el sistema informático de seguimiento de causas generado por la Defensoría Penal Pública. Lo anterior, se deberá cumplir conforme a lo establecido en el punto 8.4.D de las Bases de Licitación respectivas.

b) Obligación de preparación y capacitación permanente

El prestador deberá asistir a las jornadas de preparación y capacitación que la Defensoría Penal Pública imparta y que se consideren necesarias para el adecuado desarrollo de su cometido. Esta obligación deberá cumplirse conforme lo establecen los puntos 8.4.E y 4, de las Bases Administrativas y Técnicas, respectivamente.

c) Obligación de comparecencia y cumplimiento de instrucciones de delegación

Es una obligación del contrato la comparecencia personal del abogado contratante, a las audiencias y demás diligencias y actuaciones que así lo requieran y en las que haya sido designado o delegado para la defensa en las respectivas causas. Lo anterior deberá ceñirse a lo dispuesto en el punto 8.4.F de las Bases.

d) Obligación de cumplir instructivos

El prestador deberá dar estricto cumplimiento a los instructivos dictados por la Defensoría Nacional y por la Defensoría Regional respectiva, en las materias relativas al servicio de prestación de defensa penal pública y la administración y ejecución de los contratos.

e) Obligación de entrega de carpetas de causas terminadas

Será obligatorio para el prestador hacer entrega oportuna, regular y periódica de las causas terminadas, observando los instructivos vigentes del Defensor Nacional sobre contenido de carpetas.

La Defensoría Regional respectiva instruirá sobre la regularidad de la entrega de carpetas y podrá fijar plazos y volúmenes de entrega de las mismas.

f) Obligación de mantener identificación en oficinas

En todo caso y en relación a la infraestructura, el prestador deberá identificarse ante el público, en sus instalaciones, con un símbolo visible que los señale como prestador de defensa penal pública, los que serán elaborados por la Institución y se les proporcionará a el "prestador", los que deberán devolver al concluir el contrato respectivo, previo a la devolución del fondo de reserva o en el caso de término anticipado, antes de la aprobación del informe final.

DÉCIMO PRIMERO: DE LAS INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES Y NORMAS DE AVISO DE CONFLICTOS DE INTERESES

En la prestación de defensa bajo este contrato, el prestador deberá observar especialmente las reglas relativas a conflictos de interés del punto 8.3 de las Bases Administrativas. Asimismo, habrán de sujetarse a las reglas sobre calidades incompatibles y requisitos señaladas en el punto 7.3 de las Bases. En este último aspecto tendrán la obligación de informar las incompatibilidades sobrevinientes que respecto de la prestadora o los abogados integrantes de la nómina se produzcan.

El prestador, según el proceso establecido en la Ley N°19.718, deberá sujetar su actuar al principio de probidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO SEGUNDO: DEL PRECIO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONVENIO

Los servicios de defensa penal pública efectuados por el prestador serán pagados con la suma mensual de **\$ 4.000.000.- brutos (cuatro millones de pesos, brutos)**. En dicho monto se encuentran comprendidos todos los costos, gastos e impuestos que afectaren a la cantidad pagada por la Defensoría Penal Pública. El monto establecido incluye impuestos, que serán de cargo del prestador, efectuándose la retención legal del 10 % del citado monto por la Defensoría Penal Pública

DÉCIMO TERCERO: DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO MENSUAL

Los pagos se efectuarán mensualmente, por mes vencido. Para ello el prestador presentará, al Defensor Regional, el estado de pago correspondiente, junto a la documentación que acredite el pago de las obligaciones laborales y previsionales y la respectiva boleta de honorarios, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula novena letra c) del presente instrumento y el Informe Mensual de Prestación de Defensa a que se refiere el punto 7.9.A de las Bases Administrativas, en lo que corresponda, y conforme al formato y contenido establecido en el Anexo 4 de las Bases.

No procederá pago alguno si el prestador no presenta el Informe Mensual de Prestación de Defensa en el formato, contenido y plazos señalados en las Bases Administrativas y Técnicas.

DÉCIMO CUARTO: DE LA TERMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO

Sin perjuicio de los casos de término anticipado regulados en los números 8.8.B. y 8.12 de las bases y cláusula décimo novena del presente instrumento, los contratos para prestación de defensa penal pública terminarán por las siguientes causales:

- 1) Cumplimiento del plazo pactado para la prestación de defensa.
- 2) Muerte o incapacidad sobreviniente del contratado, para continuar prestando los servicios de defensa penal pública..
- 3) Declaración de quiebra del contratado.
- 4) Renuncia del prestador al contrato. La renuncia del contrato deberá notificarse por carta certificada con una anticipación mínima de sesenta días a la fecha en que ésta se produzca.

Las causales señaladas en los números 3 y 4 precedentes darán derecho a la Defensoría para el cobro de la garantía de adecuada prestación de los servicios y fiel cumplimiento de contrato. El cobro de la garantía será efectuado por la Defensoría sin forma alguna de juicio, ni requerimiento ni notificación judicial o administrativa previa de ninguna especie, circunstancia que es aceptada por el prestador, bastando una simple notificación administrativa con posterioridad al citado cobro, sólo para efectos de conocimiento de la prestadora.

Mientras no se comunique al prestador la conformidad y aprobación con los contenidos de su informe final y con la documentación remitida a la terminación del mismo, mantendrá la responsabilidad profesional sobre las causas asignadas y que se encuentren pendientes, hasta la aprobación del informe final.

Las causas que se encontraren pendientes al término del contrato por ocurrencia de alguna de las causales de los números 1, 2, 3 y 4 anteriores, deberán ser devueltas a la Defensoría junto a todos sus antecedentes en el plazo de treinta días de producida la causal respectiva, considerándose esta devolución como un contenido esencial del informe final. La trasgresión de esta obligación constituye falta grave. El monto de la multa que se determine será descontado, a elección de la Defensoría, del último pago que proceda efectuar al contratado o de las garantías reguladas en las Bases y este contrato.

Este contrato podrá modificarse por mutuo acuerdo de los contratantes en caso de manifiesto interés público; por exigirlo así la continuidad, calidad y regularidad del servicio; y, por razones de equilibrio económico financiero de los contratos, sin que ello pueda implicar un aumento del monto pagado de acuerdo al valor por abogado (VPA) indicado en la propuesta, la que forma parte de este contrato.

DÉCIMO QUINTO: DE LA FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION

La Defensoría Penal Pública tendrá las más amplias facultades, al tenor de la ley 19.718, su reglamento y las Bases Administrativas, especialmente su capítulo IX, y demás documentos , así como el texto de este contrato, para ejercer la fiscalización, el control y evaluación de la prestación de defensa penal pública realizada bajo este contrato.

Estas tareas se ejercerán a través de:

1. Presentación de informes por el contratado;
2. Inspecciones;
3. Auditorías externas; y
4. Sistema de reclamaciones.

Para efectos de los mecanismos de control y especialmente de inspecciones y auditorías externas el prestador deberá disponer todas las facilidades necesarias para que la Defensoría o las personas que ésta determine, lleven a cabo inspecciones y auditorías en sus dependencias, y las de los abogados que ejerzan la defensa.

Deberán, asimismo poner a disposición de la inspección las carpetas o expedientes de los casos asignados, debidamente actualizadas y completas, con todos los datos correspondientes a audiencias, diligencias y en general antecedentes de la sustanciación de cada proceso, y, deberán entregar toda la información, sobre todos los aspectos materia de su contrato, que les sea requerida por la Defensoría Nacional y Defensorías Regionales respectivas. Todo ello con el debido respeto a las normas sobre secreto profesional.

DÉCIMO SÉXTO: DEL CONTROL A TRAVÉS DE INDICADORES Y DE LA REVISIÓN GERENCIAL DE LOS CONTRATOS

La Defensoría controlará en forma continua y periódica, a través del Informe Mensual de Prestación de Defensa, el grado de normalidad de las actividades del contrato y adoptará las medidas correspondientes de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los indicadores de control mostrados por la prestadora en el mes inmediatamente anterior.

INDICADORES DE CONTROL				
Nombre Indicador	Rango de Cumplimiento			Especificaciones
	No Cumple	Cumple Parcial	Cumple	
Entrevista de imputados privados de libertad.	Inferior al 75%	Inferior al 85% y superior o igual al 75%	Igual o Superior a 85%	1) Un imputado debe ser visitado con la periodicidad que señale el Instructivo del Defensor Nacional. 2) Se entenderá imputado privado de libertad al que se encuentre sujeto a privación de libertad por la medida cautelar de prisión preventiva o internación provisoria, en los recintos penitenciarios correspondientes a la zona de licitación respectiva. 3) Se consideran como Visitados los imputados con visita

INDICADORES DE CONTROL

				<p>registrada en el SIGDP. 4) Cuando por razones derivadas del funcionamiento de los recintos penitenciarios en la zona de licitación se vuelva previsible una menor tasa de comparecencia de los imputados a las visitas periódicas de los defensores, el Defensor Regional podrá disponer la rebaja de la meta especificada hasta que las condiciones de funcionamiento permitan el cumplimiento correcto del instructivo del Defensor Nacional.</p>
<p>Solicitud de Plazo Judicial de Investigación</p>	<p>Inferior al 94%</p>	<p>Inferior al 96% y superior o igual al 94%</p>	<p>Igual o superior al 96%</p>	<p>1) No se considerarán para estos efectos las causas terminadas en primera audiencia. Se entiende por imputados terminados en primera audiencia, aquellos que tienen fecha de término el mismo día que la audiencia de formalización. 2) Se considerarán como terminados en única audiencia aquellas causas terminadas en procedimiento abreviado y cuya audiencia se haya realizado el mismo día de la formalización o las causas que en primera audiencia hayan concluido por suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio, cuya forma de término no haya sido revocada. 3) Se excluyen casos en que el juez acoge la suspensión</p>

INDICADORES DE CONTROL

				del procedimiento por aplicación del artículo 458 del CPP y no haya reapertura del procedimiento.
Apercibimiento del Plazo Judicial Vencido	Inferior al 74%	Inferior al 84% e igual o superior al 74%	Igual o superior al 84%	<p>1) Se incluyen imputados con último plazo vencido en el mes e investigación abierta por al menos 1 día.</p> <p>2) Se excluyen casos en que el juez acoge la suspensión del procedimiento por aplicación del artículo 458 del CPP y que no tengan reapertura del procedimiento.</p> <p>3) Se excluyen casos en que exista orden de detención judicial vigente y correctamente ingresada.</p> <p>4) La solicitud de apercibimiento corresponde a la gestión (actuación) del defensor registrada con posterioridad al vencimiento del último plazo.</p>
Cierre de Investigación por solicitud de apercibimiento	Menor al 35% o el valor que determine por resolución la Defensoría Regional para la zona respectiva.	Inferior al 50% y superior o igual al 35%, o los valores que determine la Defensoría Regional para la respectiva zona.	Igual o superior al 50% o el valor que determine por resolución la Defensoría Regional para la zona respectiva	<p>1) Se consideran imputados con apercibimiento de cierre petitionado y audiencia de discusión de apercibimiento.</p> <p>2) Se entiende por audiencia de discusión la primera audiencia después de la solicitud de apercibimiento.</p>
Tiempos de ingreso de datos al SIGDP	Más de 3 días	Entre 2 y 3 días	Menos de 2 días	<p>1) Se consideran en el indicador la demora en la creación de causas y en el registro de gestiones de audiencia, debiendo cumplirse la meta tanto respecto de las gestiones como de las causas.</p> <p>2) Se excluyen causas y gestiones ingresadas en causas creadas por</p>

INDICADORES DE CONTROL				
				<p>derivación de abogado particular.</p> <p>3) La demora en la creación de causas es desde la fecha del control o de la notificación, hasta el registro efectivo en SIGDP.</p> <p>4) La demora en el ingreso de gestiones es desde la fecha de la audiencia y la fecha de registro efectivo en SIGDP.</p>
Consistencia y Completitud del registro de Datos	Tasa de 8% de causas con errores	Más del 6% de causas con errores, y menos del 8%	Tasa de 6% de causas con errores	<p>1) Se consideran causas con errores aquellas que no contengan la información completa respecto del imputado según la regulación de la Ficha de Primera Entrevista por el Defensor Nacional.</p> <p>2) Son errores también las omisiones o falta de antecedentes de la causa, según lo dictamina el Instructivo de Contenido Mínimo de Carpeta.</p> <p>3) Serán calificados como errores, asimismo, el registro erróneo de actuaciones y gestiones, de acuerdo con lo señalado por el instructivo de Tramitación de Procedimiento en SIGDP.</p>
Tasa de Entrevista a Imputados	Inferior al 10% o la tasa anual que determine la Defensoría Regional para la región	Inferior al 12% y superior o igual al 10%, o la tasa de que fije anualmente la Defensoría Regional para la región respectiva	Superior o igual al 12%, o la tasa de que fije anualmente la Defensoría Regional para la región respectiva	<p>1) Se considera la gestión Realiza_Cita del módulo de atención de público a imputados y familiares</p> <p>2) Se entenderá por causa tramitada en el mes aquella que haya tenido una audiencia en el mes con imputado presente</p>

INDICADORES DE CONTROL				
Producción Promedio por abogado	Menos del 90% del valor que fije trimestralmente la Defensoría Regional para la zona correspondiente	Menos del 100% y superior o igual al 90% del valor que fije trimestralmente la Defensoría Regional para la zona correspondiente	Igual o superior al 100% del valor que fije trimestralmente la Defensoría Regional para la zona correspondiente	1) La producción del periodo corresponde a la sumatoria de puntaje por gestiones de audiencia, entrevista con imputados, visita de cárcel y recursos, según Modelo de Carga de Trabajo. 2) La cantidad de abogados contratados corresponde al número total contratado proporcional al porcentaje de la demanda ofertada y el número total de abogados requeridos

En especial la Defensoría iniciará el correspondiente procedimiento de aplicación de multas si el prestador muestra incumplimiento reiterado de los indicadores sin fundamento plausible, por dos meses consecutivos, conforme lo señala el literal A.1) del punto 9.2. de las Bases Administrativas.

Asimismo, la Defensoría Regional realizará periódicamente una "Revisión Gerencial de los Contratos", tomando en consideración los niveles de cumplimiento de los indicadores, así como otros insumos de control y evaluación de los defensores penales públicos, como las inspecciones, auditorías, y el resultado de los indicadores de pago variable. De la revisión de contratos que haga la Defensoría Regional podrán resultar instructivos generales sobre las condiciones de la prestación de defensa, o en acuerdos particulares con el prestador, los cuales deberán ser cumplidos en los tiempos estipulados en ellos, y cuya infracción será sancionada con multa grave, según lo establece el 2.4 del numeral 8.8.A. de las Bases Administrativas.

DÉCIMO SEPTIMO: DE LAS MULTAS

Por las faltas cometidas en el cumplimiento de este contrato podrán aplicarse multas de acuerdo a lo establecido en el punto 8.8.A; 8.9, 8.10, de las Bases Administrativas, y a lo señalado en el texto de este contrato.

Las multas se aplicarán y calificarán por el Defensor Regional respectivo, mediante resolución fundada, y su aplicación será reclamable conforme con lo establecido en el punto 8.10 de las Bases Administrativas.

1. Falta menos grave: Importa una sanción de multa de 50 U.F., la cual se aplicará en los siguientes casos:
 - a. Si la defensa no fuere satisfactoria de acuerdo con los estándares básicos de defensa definidos por el Defensor Nacional, tal como lo indica la letra a) del artículo 69 de la ley 19.718, y siempre que el perjuicio causado fuere posible de subsanar con otras actuaciones o diligencias nuevas y posteriores. Para estos efectos deberá estarse a lo dispuesto en el punto 8.8, A.1.1 de las Bases de Licitación.
 - b. Falta de entrega oportuna de los informes exigidos al contratante y la no corrección oportuna o corrección insatisfactoria a los mismos.
 - c. Incumplimiento de la obligación de asistir a las jornadas de capacitación que imparta la Defensoría, contemplada en los incisos primero y segundo del punto 8.4.E de las Bases de Licitación, así como su acreditación sin causa justificada.

- d. Incumplimiento de los instructivos dictados por la Defensoría Nacional y la Defensoría Regional respectiva, en materias relativas al servicio de prestación de defensa penal pública y la administración y ejecución de los contratos, conforme se establece en el punto 8.4.G. de las Bases.
 - e. No dar cumplimiento a la obligación de mantener la identificación como prestadores de defensa penal pública en sus oficinas, así como la no devolución de la referida señalética al finalizar el contrato por cualquier causa, exigencias establecidas en el punto 8.4.I de las Bases.
 - f. La falta de registro o el registro de datos erróneos o incompletos en los sistemas de la Defensoría, sin fundamento plausible.
2. Falta Grave: Importa una sanción de multa de 100 UF, la cual se aplicará en los siguientes casos:
- a. Si la defensa no fuere satisfactoria de acuerdo con los estándares básicos de defensa definidos por el Defensor Nacional, tal como indica la letra a) del artículo 69 de la ley 19.718, y siempre que se cause un perjuicio que no es posible de subsanar con otras actuaciones o diligencias nuevas y posteriores. Para estos efectos deberá estarse a lo dispuesto en el punto 8.8., A.2.1 de las Bases de Licitación.
 - b. Incumplimiento de la obligación de llevar registro completo y oportuno de las carpetas de causas, contemplada en el punto 8.4.D, inciso cuarto de las Bases.
 - c. Incumplimiento de la obligación de asistir a capacitación obligatoria solicitada por la Defensoría, y su acreditación, para el caso que el prestador resulte evaluado negativamente con observaciones o reparos en mecanismos de evaluación y fiscalización con que cuenta la institución, conforme lo dispone el punto 8.4.E. de las Bases de Licitación.
 - d. Incumplimiento de la obligación de comparecencia personal del abogado contratado a las audiencias y demás diligencias y actuaciones que así lo requieran y en las que haya sido designado o delegado para la defensa en las respectivas causas, establecida en el punto 8.4.F de las Bases de Licitación.
 - e. Consignación de datos falsos en los sistemas con que cuenta la Defensoría Penal Pública, conforme lo establece el punto 8.4.D de las Bases.
 - f. La falta de devolución de las carpetas de causas y sus antecedentes a la Defensoría, en conformidad a lo dispuesto en los números 8.4.H y 8.7. de las Bases.
 - g. Incurrir en reiteración de faltas menos graves. En tal caso, a partir de la comisión de la tercera falta menos grave ésta se reputará grave.
 - h. La falta de comunicación al Defensor Regional respectivo, en los casos de reemplazos y sustituciones, contempladas en los puntos 8.5.1 y 8.5.2, respectivamente de las Bases de Licitación.
 - i. Negativa injustificada y persistente a proporcionar información requerida por la Defensoría o falta de otorgamiento de las facilidades necesarias para la realización de inspecciones o auditorías, de modo que obstaculice el control, evaluación o fiscalización de la prestación de defensa penal pública.
 - j. El incumplimiento reiterado de los indicadores asociados al pago mensual, sin fundamento plausible, por dos meses consecutivos, conforme al punto 9.2 de las Bases.
 - k. Falta de cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados con la Defensoría Regional respectiva, en base a los manuales relativos a los pagos y aplicación de indicadores.
 - l. Que la prestadora utilice para uso particular los sistemas de información de la Defensoría, incluyendo cualquier acceso a otros sistemas que posea en su calidad de defensor penal público
 - m. El incumplimiento reiterado de los indicadores asociados al pago mensual, sin fundamento plausible, por dos meses consecutivos.

DÉCIMO OCTAVO: DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONVENIO

Los contratos de prestación de defensa penal, podrán terminarse anticipadamente en los siguientes casos:

- 1) Incurrir en tres faltas graves durante la vigencia del contrato;
- 2) El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones esenciales del contrato establecidas en las bases o en este instrumento;
- 3) Infracciones a la probidad e integridad profesional con ocasión de la prestación de defensa, tales como: la adulteración o el falseamiento del contenido de actas de audiencias, de resoluciones judiciales, de planillas de visitas de cárcel, de informes periciales; la vulneración al deber de confidencialidad o reserva de la información relativa al caso del o los imputados de los que sea defensor titular o de los que tome conocimiento por vía de delegación de gestión o audiencia; o el cobro a usuarios o familiares por los servicios de defensa penal pública contratados, debiendo sujetar su actuar al principio de probidad consagrado en el artículo 8° de nuestra Carta Fundamental;
- 4) Entrega por parte del contratante de antecedentes falsos durante el procedimiento de contratación;
- 5) No dar inicio a la ejecución del contrato por más de 30 días desde la firma del mismo, conforme al punto 7.2. de las Bases de Licitación;
- 6) La falta de comunicación oportuna de los conflictos de intereses que afecten al prestador.
- 7) Hacerse cargo el prestador persona natural, en calidad de abogado particular, de algún caso que le hubiese correspondido conocer al prestador en sus gestiones relacionadas con el contrato en que preste dicho abogado el servicio de defensa penal pública.
- 8) La derivación, por parte del prestador, de sus casos a otros abogados, teniendo el profesional en ellos un interés económico o bien obteniendo por ello un beneficio directo.
- 9) La falta de entrega de tres informes mensuales consecutivos, o la falta de entrega de cuatro informes en los últimos doce meses.

El procedimiento de término anticipado en estos casos se sujetará a las siguientes reglas:

- El Defensor Regional hará una descripción de los hechos y de las normas incumplidas por el prestador y que constituyen la causal de terminación, comunicando al Defensor Nacional la solicitud de término de contrato.
- El Defensor Regional deberá adoptar en general todas las medidas para asegurar la calidad, cobertura y continuidad de la prestación, pudiendo, en casos calificados, suspender la entrega de causas y solicitar la devolución de carpetas de las causas actualmente vigentes.
- Conociendo de esta solicitud de término, el Defensor Nacional podrá pedir antecedentes adicionales o decretar diligencias para su acertada resolución
- La resolución que formalice el término anticipado al contrato, se notificará personalmente al prestador. En caso de no hallarse en dos días distintos, se procederá a la notificación por carta certificada.
- La formalización del término anticipado de un contrato, acarrea necesariamente el que se hagan efectivas las garantías de adecuada prestación de los servicios licitados y de fiel cumplimiento del contrato.
- Sin perjuicio de lo señalado en el primer punto de este procedimiento de término, se exigirá la devolución de los casos encomendados, en un plazo no superior a 30 días contados desde la notificación de la resolución del Defensor que dispone el término.
- La Defensoría podrá ejercer todas las acciones civiles y penales dirigidas al cumplimiento de esta obligación. Cuando la terminación del contrato irroque perjuicios a la Defensoría, ésta ejercerá las acciones indemnizatorias correspondientes.
- La resolución del Defensor Nacional que pone término al contrato, será reclamable ante la Corte de Apelaciones de la región respectiva, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su notificación, conforme con lo establecido en el artículo 73 de la Ley N° 19.718.

- De rechazarse la terminación del contrato por parte de la Corte de Apelaciones, se restituirán las carpetas de las causas al contratado sancionado, si precediere, y continuará su ejecución hasta el término del plazo contratado sin considerarse el término en que estuvo pendiente la resolución de la terminación.

a) Terminación anticipada por mutuo acuerdo de las partes:

La Defensoría podrá convenir, de común acuerdo con el prestador, el término anticipado del contrato, cuando razones de equilibrio financiero así lo ameriten o cuando razones de buen servicio así lo aconsejen, debiendo siempre velarse por la calidad de la prestación de la defensa y el interés fiscal comprometido.

En este caso, la Defensoría podrá renunciar a la facultad de hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato entregada por el prestador en atención a que el término anticipado del contrato es una manifestación de la voluntad de las partes.

VIGÉSIMO: DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y DEL FONDO DE RESERVA

Con el fin de garantizar una adecuada prestación de los servicios licitados y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato para prestación de defensa penal pública, el prestador deberá constituir y entregar a la Defensoría Penal Pública alguna de las siguientes garantías:

- a) Una boleta de garantía bancaria a la vista e irrevocable por una suma \$ 1.200.000.- (un millón doscientos mil pesos), equivalente al 5% del valor del contrato, de acuerdo al punto 10.3 de las bases administrativas, tomada a nombre de la Defensoría Penal Pública con una vigencia superior en 150 días a la fecha de término del contrato. La boleta será custodiada en las dependencias de la Defensoría Regional respectiva; o
- b) Una póliza de garantía, de ejecución inmediata, que cubra el fiel cumplimiento del contrato y la adecuada prestación de los servicios licitados, por el mismo monto señalado en la letra a) anterior, pagadera a requerimiento inmediato de la Defensoría, de verificarse las causales que en estas bases se contemplan para hacerla efectiva, con una vigencia superior en 150 días a la fecha del término del contrato. Esto significa que el pago de la póliza deberá efectuarse sin que deba la Defensoría estar sometida a procedimientos judiciales o de otra clase relacionados con el cobro, ni pueda su pago verse condicionado a liquidación de ninguna clase. De optar por esta garantía la Defensoría deberá ser informada sobre el posible cese del pago de la prima, constituyendo éste un incumplimiento del contrato.

En estas garantías deberá expresarse "Para garantizar la Adecuada Prestación de Servicios de Defensa Penal Pública y Fiel Cumplimiento del Contrato".

Esta garantía será devuelta dentro de los 3 meses siguientes a la aprobación del informe final del convenio, una vez realizados los descuentos que procedan en su caso.

Con el mismo fin anteriormente señalado se constituirá un **fondo de reserva** mediante la retención de cada uno de los pagos de un monto en pesos equivalente al 4% de cada estado de pago, que garantizará la adecuada prestación de los servicios licitados y el fiel cumplimiento del contrato para prestación de defensa penal pública.

Todo o parte de los montos integrantes de este fondo de reserva podrán aplicarse a los montos que se adeudaren a la defensoría por concepto de multas e indemnizaciones.

El monto acumulado del fondo de reserva, debidamente reajustado, se pagará al término del contrato conjuntamente con el último pago, sin perjuicio de los descuentos pertinentes en su caso.

VIGÉSIMO PRIMERO: PERSONERÍAS

La personería de don Fernando Abelino Acuña Gutierrez para representar a la Defensoría Penal Pública consta de Resolución N° 003/ 2014 y la Resolución Exenta N° 177 de 30 de Abril de 2015 de la Defensoría Nacional que delega facultades en los (las) Defensores (as) Regionales.

VIGÉSIMO SEGUNDO: CANTIDAD DE EJEMPLARES DEL CONVENIO.

El presente convenio se firma en tres ejemplares de idéntico tenor, quedando dos en poder de la Defensoría y uno en poder del prestador. Fernando Abelino Acuña Gutierrez. Mauricio Ignacio Martínez Peralta. Defensor Regional de Aysén. Defensoría Penal Pública. PRESTADOR .Hay dos firmas ilegibles.

3° DÉJESE establecido que no corresponderá efectuar pago alguno respecto a la presente prórroga de contrato, sino hasta la total tramitación del presente acto administrativo.

4° IMPÚTESE el gasto del presente contrato al subtítulo 24, ítem 01, Asignación 610 del Programa de Licitaciones Defensa Penal Pública del presupuesto vigente de la Defensoría Penal Pública.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE



FERNANDO ABELINO ACUÑA GUTIERREZ
DEFENSOR REGIONAL DE AYSÉN

FAG/JCS/RAB/vlg.-
Distribución:

- Defensoría Regional de Aysén
- DAR Región de Aysén
- Sr. Mauricio Martínez Peralta
- Depto. de Administración y Finanzas
- Dpto. de Estudios
- Oficina de Partes.
- Archivo

PROPUESTA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA PARA CONVENIO DIRECTO

En Coyhaique, a 31 de Mayo de 2016 el abogado Señor Mauricio Ignacio Martínez Peralta, RUT N° 16.014.496-3, en adelante “ el prestador” domiciliado en la ciudad de Coyhaique, calle Freire N° 130, viene en formular la siguiente propuesta técnica para el cumplimiento del Convenio Directo que se llegare a celebrar con la Defensoría Penal Pública de Aysén para la prestación de defensa penal en la denominada Zona Uno, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique y Excelentísima Corte Suprema.

Primero: El prestador dispondrá para el desarrollo de sus labores de defensa de las instalaciones que se encuentran ubicadas en la ciudad de Coyhaique, calle Freire N° 130, dependencias que cuentan con oficina con las condiciones de privacidad necesarias para atender a imputados, testigos, familiares y peritos y sala de espera, debidamente calefaccionados con su adecuado y correspondiente mobiliario y servicios higiénicos. Asimismo cuenta con equipos computacionales y conexiones de banda ancha, antivirus, licencias y un navegador adoptado como estándar para la Institución, impresora con escáner, todos técnicamente aptos para el desarrollo de las labores de defensa, así como línea telefónica fija N° 672233267 y fono celular 990208502 , disponibles las 24 horas del día en caso de turno.

Segundo: La oficina antes indicada será atendida, en un horario de 08:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas de Lunes a Viernes por el prestador y un asistente administrativo, horario que deberá ser informado al público usuario mediante avisos puestos en lugar visible de las oficinas.

Tercero: El prestador se compromete a cumplir durante la vigencia del convenio, con atención de público regular y permanente, en horarios hábiles, en su oficina antes señalada. Igualmente se obliga por el presente a dar prestación de defensa penal pública, de acuerdo a instrucciones emanadas de la Defensoría Regional de Aysén, a través de las instrucciones que se imparta en lo general por el Jefe de Estudios y en lo específico por la Defensora Local Jefe, responsable de gestionar la Zona 1 en forma integral y completa.

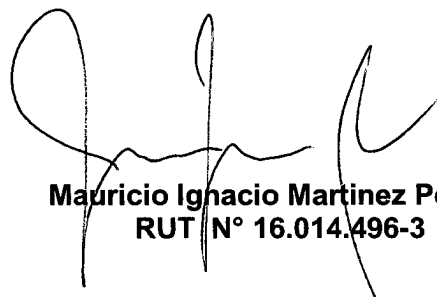
Cuarto: Respecto de la distribución de las funciones, el prestador operará bajo los siguientes parámetros, y esquema de asignación, el cual podrá modificarse en acuerdo de las partes, según contingencia operativa, y que se consigna en términos generales:

- a) Mantendrá una carga proporcional a la de la defensora local de Coyhaique o en su defecto lo que se establezca por la Defensora Local Jefe. Entre de las causas a tramitar bajo su responsabilidad están causas nuevas y que ya se encontraba en tramitación en forma aleatoria.
- b) Se priorizará en su asignación las causas de termino en primera audiencia
- c) Asumirá turnos semanales de audiencia - controles y fin de semana controles aleatoriamente según calendario para la Zona 1
- d) No se le asignaran causas de adolescente, salvo aquellas de baja complejidad como juicios simplificados efectivos de baja complejidad y/o causas con término en primera audiencia
- e) Se le asignarán alegaciones ante Ilustrísima Corte en casos determinados en que se disponga por la Defensora Local Jefe de la Zona 1, que se requiere intervención personal
- f) Deberá asistir a las reuniones técnicas, gerenciales y clínicas jurídicas en un 80% como mínimo.

Quinto: El prestador compromete para el asistente administrativo contratado, establecer un proceso de inducción y capacitación en SIGDP en coordinación con Unidad de Estudios y de Administración Regional de a lo menos una semana con monitoreo permanente.

Sexto: Se deja expresa constancia que en el ejercicio de la defensa, el prestador se regirá – en lo pertinente - conforme a toda la normativa vigente que a este respecto tiene la Defensoría Penal Pública, especialmente en cuanto a estándares de defensa, delegación de audiencias, traspaso de causas, visitas de cárcel, contenido mínimo de carpetas, llenado de fichas (primera entrevista e informativa), atención de público, ingreso de datos en los sistemas informáticos. Asimismo, asistencia a Clínicas Jurídicas, Talleres de Asistentes Administrativos, Capacitaciones, entre otras actividades formativas e informativas a sus propias costas y medios de traslado.

Séptimo: En caso de ausencia por enfermedad o situaciones de fuerza mayor, el prestador deberá asegurar la continuidad del servicio a través de un reemplazo idóneo para tal efecto de acuerdo a requisitos establecidos por la DPP y comunicar con anticipación a la Defensora Local Jefe para la activación del reemplazo en sistemas informáticos y delegaciones respectivas. De no proceder el reemplazo se descontarán los días no trabajados en forma proporcional al monto mensual fijado por contrato.



Mauricio Ignacio Martínez Peralta
RUT N° 16.014.496-3



ANEXO N° 1: REGISTRO Y CONTROL DE GARANTÍA

FORMULARIO N° 51

1. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA

Fecha y hora de la recepción	01-06-2016 -- 11:20 hrs.
Motivo	FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO
Tipo de Garantía	BOLETA GARANTIA
Nombre Empresa	MARTINEZ PERALTA MAURICIO IGNACIO
Domicilio	
RUT Empresa	16.014.496-3
Fono y Correo Electrónico	/
Glosa de la Garantía	LA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS DE DEFENSA PENAL PUBLICA Y FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Nombre Depto. o Unidad de Contacto	

2.CUSTODIA DE LA GARANTÍA

Fecha de Recepción	01-06-2016
Nombre Responsable de la Custodia	jcarrillo
Serie o Número	0109651
Institución Emisora	BBVA
Fecha de Emisión	01-06-2016
Fecha de Vencimiento	30-04-2017
Monto en Pesos	1.200.000,00

3.DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA

Fecha de Devolución	
Nombre del Habilitado que Retira	
RUT del Habilitado que Retira	
Firma del Habilitado que Retira	

4.COBRO DE LA GARANTÍA

Fecha	
Motivo	
Antecedentes de Respaldo	



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile.

06

\$ 1.200.000,00

504 - 88

95

BOLETA DE GARANTIA

A FAVOR DE ORGANISMOS PUBLICOS
COYHAIQUE, 01 de JUNIO de 2016

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, PAGARÁ A DEFENSORIA PENAL PUBLICA

LA SUMA DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL*****
PESOS MIL, SEGÚN DEPÓSITO QUE HA QUEDADO EN ESTA OFICINA.

PAGADERA A LA VISTA/SIN INTERESES

BOLETA DE GARANTIA TOMADA POR MAURICIO IGNACIO MARTINEZ PERALTA

RUT 16.014.496-3

PARA GARANTIZAR DETALLE AL DORSO

VENCIMIENTO 30/04/2017

210001971

OFICINA SUC. COYHAIQUE

DIRECCION CALLE CONDELL 254

SANDRA BARRIENTOS BOPQUE
Jefe Gestión Operativa

JESAR SALAS FUENZALIDA
Agente

SERIE 0109651

NO ENDOSABLE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbilcl

PP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE

